

LA NUEVA REFORMA DE LA PAC, NI SOCIAL NI VERDE

Las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC) están entrando en un momento decisivo, a nivel europeo y estatal, que culminará en la primavera de 2021 cuando el Ministerio de Agricultura publique el borrador del llamado Plan Estratégico Nacional, estableciendo cómo se utilizarán los 34.124 millones de euros de pagos directos, los 5.069 millones de medidas de mercado y los 8.531 millones de desarrollo rural en el Estado Español. Si se eligen como criterios de reparto los derechos históricos y de superficie, Galiza quedará marginada, una vez más, en la nueva PAC; y seguiremos batiendo tristes récords en aldeas abandonadas, número de incendios, expolio rural o destrucción de puestos de trabajo.

Aunque el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea incluía equiparar la renta de las personas agricultoras con la de los demás ciudadanos y ciudadanas, cincuenta años después los precios bajos en origen, incluso por debajo de los costes de producción, son una de las grandes deudas de esta Política Agrícola Común. La reforma de la PAC debe garantizar, en primer lugar, el derecho a una alimentación sana para todas las personas y hacerlo de forma sostenible, pensando también en el futuro y en las generaciones que nos sucederán. Para ello, es fundamental cuidar de la biodiversidad, de la calidad del agua, del aire o de la salud del suelo. Solo muchas personas campesinas que cultivan nuestros alimentos son la garantía de que la sociedad pueda tener una alimentación saludable y nutritiva.

Las sucesivas reformas de la PAC han financiado la destrucción de la agricultura familiar y el acaparamiento de la producción y distribución de alimentos por parte de las grandes corporaciones; también financiaron la producción industrial, la globalización económica y la desregulación de los mercados al debilitar las normas higiénico-sanitarias, el principio de precaución y la protección de la calidad de los alimentos. Las políticas neoliberales privilegian la firma de continuos acuerdos de comercio e inversión con terceros países (Canadá, Mercosur, Estados Unidos...), que conducen a la importación masiva de materias primas y alimentos



producidos con estándares máis baixos que los que existen en la UE, directamente relacionados con la deforestación de grandes áreas del planeta e incluso utilizando materias activas y procesos que aquí están prohibidos por su peligrosidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado como uno de los principales defensores, por ejemplo, del acuerdo UE-Mercosur que en estos días está provocando un rechazo generalizado en la sociedad europea por sus graves impactos.

Para asegurar precios justos y rentas dignas, las políticas públicas para regular la producción y reequilibrar la cadena de valor son fundamentales, evitando abusos por parte de la industria y la gran distribución alimentaria. Dejarles la responsabilidad de negociar precios rentables a las organizaciones de productores, como sucedió en el período actual, con las Organizaciones de Productoras Lácteas (OPLs) por ejemplo, resultó un verdadero fracaso, como denunciarnos en el Sindicato Labrego Galego desde el minuto uno, y solo sirvió para despilfarrar dinero público que se malgastó en estos inventos.

Este período de pandemia debe enseñarnos que no podemos permitirnos depender, en cuestiones fundamentales para la población como la salud o la alimentación, de las importaciones a miles de kilómetros, estableciendo como principio fundamental avanzar en la soberanía alimentaria y en el desarrollo de modelos de producción agroecológicos.

Recientemente, hemos visto a los grandes partidos votar en contra de las enmiendas que proponen que la reforma de la Política Agrícola Común incorpore los compromisos del Pacto Verde Europeo, por lo que, aunque solo sea en las grandes declaraciones, el compromiso con el medio ambiente parece ser uno de los grandes avances de esta PAC. En la práctica, la mayor parte del dinero volverá al modelo más contaminante y el tinte verde volverá a ser un maquillaje para engañar a la sociedad. Incluso se propone que los propios eco-esquemas se utilicen para financiar la búsqueda de soluciones a los graves impactos ecológicos de los modelos superintensivos, por ejemplo con el tratamiento en macroplantas de enormes cantidades de purines procedentes de grandes granjas como propone la Xunta de Galicia. Existe una amplia experiencia de plantas de esta naturaleza que, hasta ahora, solo han funcionado recibiendo fuertes subsidios públicos, para



luego cerrarse, mientras que las áreas donde se ubicaban estas grandes concentraciones de animales sufrieron serios problemas de contaminación de sus suelos y acuíferos. El político parece ser el animal que tropieza dos o cien veces con la misma piedra, despreciando usar ese dinero para sostener un modelo de agricultura y ganadería verdaderamente respetuoso con la naturaleza.

Jóvenes, mujeres y los proyectos ecológicos y más diversificados, pero de menor dimensión, son los más discriminados por un sistema de ayudas que se fundamenta en derechos históricos y en la superficie. Así, reciben cantidades millonarias proyectos que hoy no hacen más que mantener la propiedad de la tierra, simplemente justificando que los tienen en "buenas condiciones agrícolas", mientras que las personas jóvenes que se incorporan en muchos sectores lo hacen sin ningún tipo de apoyo o con cantidades de dinero ridículas. Para la mayor parte de la huerta ecológica o de la viticultura gallegas, por ejemplo, serían mayores los costes burocráticos que las ayudas que recibirían. Esta PAC penaliza claramente los modelos productivos más sostenibles y el relevo generacional. El 20% de las personas que se benefician de la PAC a nivel europeo reciben el 80% de las ayudas, mientras que alrededor del 40% de las personas agricultoras europeas no se benefician de ellas.

El criterio de pago por hectárea, en el caso de Galiza, es completamente injusto y nos convierte en la única comunidad de España que tiene más personas cotizando al sistema agrario de la Seguridad Social (29.013) que personas que reciben la PAC (26.805). En España hay alrededor de 600.000 beneficiarios de ayudas que no cotizan por la Seguridad Social Agraria.

Si bien en el debate del Parlamento Europeo y del Consejo se han descafeinado las primeras propuestas encaminadas a reducir la actual concentración de ayudas, estrechamente ligada al deterioro de los precios de producción, lo cierto es que en esta nueva PAC el Gobierno español jugará un papel clave a través de la elaboración del Plan Estratégico Nacional. El debate sobre la posibilidad de elaborar planes estratégicos autonómicos, en nuestro caso un plan gallego adaptado a nuestro territorio y a las características de nuestra agricultura y ganadería por el que apostaba el SLG, fue descartado desde un principio por la Xunta de Galicia y otras organizaciones agrarias. Estamos en peligro de volver a sacrificar nuestros sectores productivos para favorecer los intereses



de outros sectores con áreas mucho máis grandes como el olivar, del que tanto habla el Ministro de Agricultura, Luís Planas, u otros con mucho peso en otros territorios.

El Ministerio de Agricultura, e incluso representantes del sector, se han posicionado en contra de la rebaja de los pagos directos recibidos por encima de los 60.000 euros, y esto se debe a que claramente su compromiso no es apoyar ni a los jóvenes, que hoy en día no cuentan con ayudas, ni a la agricultura familiar. En el último período, por ejemplo, hubo cobros anuales como los de la familia Mora-Figueroa Domecq, de 7,3 millones de euros; las sociedades Elías Hernández Barrera, de 4,4 millones; las empresas de José García Carrión, de 3,3 millones; la Casa de Alba, de 2,9 millones; o Mercadona, de 2,6 millones; por poner unos casos realmente incomprensibles de despilfarro legal de dinero público. Cabe recordar que la media de ayudas recaudadas por persona beneficiaria en Galiza es de 2.590 euros.

Actualmente, existe un debate muy vivo para intentar fijar una ayuda máxima, pero están intentando poner toda una serie de descuentos como gastos laborales y otros para intentar sortear estas limitaciones. La propia Comagri intenta limitar las cantidades a redistribuir al 10% del presupuesto anual del primer pilar de la PAC, retirar la reducción progresiva de las ayudas a los beneficiarios que perciban entre 60.000 y 100.000 euros, e incluso la obligatoriedad de que los estados apliquen topes. Necesitamos una PAC que priorice la creación de empleo y no se base en derechos históricos o hectáreas, estableciendo un pago digno que apoye la renta de las personas activas, aquellas que cotizan a la Seguridad Social Agraria y obtienen más del 50% de sus ingresos de esta actividad. También deben establecerse mecanismos para apoyar a quienes, aunque estén desarrollando una actividad agrícola o ganadera a tiempo parcial, brinden bienes o servicios a la sociedad como conservar ecosistemas de alto valor, criar variedades autóctonas, producir en ecológico, trabajar modelos ganaderos extensivos o desarrollar sus proyectos en zonas desfavorecidas o de montaña.

Galiza sale perdiendo con uno de los pagos por unidad de trabajo agrario (UTA) más bajos, con una ayuda media por persona beneficiaria mínima (2.590,10 euros frente a los 3.959,45 euros de



media del Estado), con una de las ayudas más bajas en relación con renta agraria y un pago por superficie muy bajo. Hoy nos encontramos entre las comunidades con menor ratio de ayudas en relación a la renta empresarial agraria (el 19,5% frente al 30,3% de la media española). Otro de los grandes obstáculos para el campo gallego es el pequeño porcentaje de superficie agraria útil (SAU) y SAU con derechos de ayuda: 58,5% en Galiza frente al 80,7% de la media estatal.

La defensa del statu quo actual perpetúa un sistema muy discriminatorio para los gallegos y las gallegas que viven de la actividad agrícola y ganadera. Resulta difícil entender que haya quién defienda que perciban ayudas aquellos que no tienen ninguna o casi ninguna actividad, mientras quedan fuera las personas jóvenes y muchos sectores productivos, o se mantiene una enorme discriminación de género en los pagos al mismo tiempo que el Ministerio de Agricultura se autoproclama el gran defensor de los derechos de la mujer. Si queremos que todas aquellas personas activas en Galiza reciban una ayuda básica a la renta digna, y pretendemos igualarnos a la media española, no lo conseguiremos si se siguen estableciendo los importes en función de la superficie, tal y como se está proponiendo.

En los últimos meses, también hemos visto con estupor casos de explotación laboral normalizada y pésimas condiciones de vida y vivienda que padecen muchas personas trabajadoras agrícolas en diferentes puntos de España. Esta situación de precariedad y maltrato, muchas veces hacia las mujeres, denunciada reiteradamente y conocida por las autoridades, debe ser prohibida y debe exigir también la imposición de una condicionalidad social para poder recibir las ayudas de la PAC, verificando el cumplimiento de la legislación laboral vigente y retirando las subvenciones en caso de infracciones graves.

Isabel Vilalba Seivane

secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego

